

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/WGTCP/W/99  
25 de septiembre de 1998

(98-3720)

**Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre  
Comercio y Política de Competencia**

Original: inglés

## **COMUNICACIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS**

Se recibió de la Comunidad Europea y sus Estados miembros la siguiente comunicación, de fecha 15 de septiembre de 1998, con el ruego de que se hiciese llegar a los Miembros.

Acerca de las relaciones entre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual  
relacionados con el comercio y la política de competencia, así como  
entre las inversiones y la política de competencia

### **PRIMERA PARTE: LAS RELACIONES ENTRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO Y LA POLÍTICA DE COMPETENCIA**

#### Introducción

1. Las relaciones entre los derechos de propiedad intelectual y la competencia, con inclusión de la política en materia de competencia, se encuentran desde hace muchos años en el centro de los debates sobre cuestiones de política. La dimensión comercial de esos debates estuvo presente en el núcleo de las negociaciones de la Ronda Uruguay que llevaron a la conclusión del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

2. Se admite hoy en día, por lo general, que la protección de los derechos de propiedad intelectual, que otorga necesariamente a los titulares un derecho exclusivo, con limitaciones temporales en la mayor parte de los casos, fomentará la expansión y el bienestar de las economías. Los derechos en exclusiva estimulan la investigación y el desarrollo, y, por ende, el crecimiento. La justificación última de su protección es la de que contribuyen a crear una eficacia dinámica que resulta favorable para la competencia y compensa con creces los aumentos de eficacia distributiva que pudieren resultar, a corto plazo, de la ausencia de tal protección.

3. Sin embargo, y al igual de lo que ocurre en otras esferas, el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual debe estar sujeto por completo a que se respete la legislación en materia de competencia. Así sucede en la Unión Europea, en la que son de aplicación los artículos 85 y 86 del Tratado de la CE<sup>1</sup>, así como el reglamento de la CE sobre operaciones de concentración de empresas,

---

<sup>1</sup> Artículo 85 del Tratado de la CE

1) Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en:

que se adoptó en 1989.<sup>2</sup> Se debe tener presente, con todo, que un derecho en exclusiva que permita a su titular prohibir las infracciones no dará lugar de por sí a un abuso del poder de mercado, ya que tal abuso depende, al igual que en otros casos, de cual sea la disponibilidad y la participación en el mercado de productos similares o sustitutivos, y del comportamiento del titular del derecho.

4. Desde el punto de vista de las relaciones con el comercio, algunos países intentaron, en ocasiones, regular la presencia de empresas extranjeras en sus mercados mediante la inserción de prescripciones especiales de transferencia de tecnología u otras condiciones en sus leyes o reglamentos en materia de inversión extranjera. Esas disposiciones legales o reglamentarias podían estipular, por ejemplo, que se transfiriesen determinados derechos de propiedad intelectual a una empresa conjunta, con lo cual el asociado nacional podría beneficiarse de la tecnología aportada por la empresa extranjera que trataba de establecerse en el mercado.

5. Ese género de selección previa es menos frecuente en la actualidad. Ello se debe, en parte, a que se juzgó que la legislación en ese sentido surtía efectos desalentadores en cuanto a atraer del extranjero inversiones y tecnología. Se debe también a que existen otros instrumentos, como, por ejemplo, el otorgamiento de licencias obligatorias en la esfera de las patentes, aun cuando tales instrumentos sean de uso poco frecuente y estén sujetos a condiciones específicas. Es lo que ocurre

- 
- a) fijar directamente o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
  - b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
  - c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
  - d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
  - e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
- 2) Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.
- 3) No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:
- cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas;
  - cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas;
  - cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,
- que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:
- a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;
  - b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.

#### Artículo 86

Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado o en una parte sustancial del mismo.

Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en:

- a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas;
- b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores;
- c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
- d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.

<sup>2</sup> Véase el Reglamento (CEE) N° 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concertación entre empresas.

también cuando un gobierno, o un tercero autorizado por un gobierno, desea utilizar la materia de una patente sin autorización del titular. Goza hoy de amplio reconocimiento, por último, la idea de que la legislación y la política en materia de competencia, que por lo general se aplican *a posteriori*<sup>3</sup>, pueden utilizarse como instrumento eficaz y menos costoso e incómodo para hacer frente a posibles abusos de los derechos de propiedad intelectual.

6. En términos generales, parece que el Acuerdo sobre los ADPIC refuerza la posición de los países que, para protegerse contra abusos de los derechos de propiedad intelectual que tengan un efecto negativo en la competencia, promulgan legislación sobre la competencia y establecen una jurisdicción independiente y eficaz en esa materia. Concretamente, en la esfera de las prácticas anticompetitivas en cuanto a licencias contractuales, se estipula en el Acuerdo sobre los ADPIC que podrán adoptarse medidas apropiadas para impedir las, que pueden incluir las condiciones exclusivas de retrocesión, las condiciones que impidan la impugnación de la validez y las licencias conjuntas obligatorias. Por último, el Acuerdo sobre los ADPIC insta a los Miembros a cooperar entre sí para hacer frente a las prácticas anticompetitivas, dentro de los límites fijados por sus respectivas legislaciones nacionales y con dependencia de la conclusión de acuerdos de cooperación bilaterales y mutuamente satisfactorios.

7. En términos más generales, cabe hacer notar que el Acuerdo sobre los ADPIC admite que la OMC puede imponer limitaciones del carácter exclusivo de un derecho de propiedad intelectual por razones ajenas a la política de competencia, y que en ello reside, en realidad, uno de los factores de equilibrio fundamentales del Acuerdo en su conjunto. En la esfera del derecho de autor, por ejemplo, la legislación nacional puede admitir excepciones al derecho exclusivo del titular, cuando se trata de finalidades didácticas y de utilización privada.<sup>4</sup> De modo análogo, en la esfera de las patentes pueden excluirse de la patentabilidad, entre otros, los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.<sup>5</sup> Por regla general, la invención patentada puede ser utilizada para ulteriores investigaciones. Los Miembros pueden también autorizar el uso de una patente por un tercero mediante la emisión de una licencia obligatoria, siempre que se cumpla una serie de condiciones.<sup>6</sup> Los Miembros pueden, igualmente, establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio.<sup>7</sup>

8. Los diversos ejemplos citados demuestran que el carácter exclusivo de los derechos de propiedad intelectual puede ser objeto de limitaciones ajenas al objetivo, de índole competitiva, de proteger los derechos de propiedad intelectual y combatir las prácticas anticompetitivas.

9. Esta parte de la comunicación de la CE se divide en dos secciones: en la primera se describe a grandes rasgos la estructura del Acuerdo sobre los ADPIC; en la que le sigue se ofrece una visión panorámica de cómo se aplica en la CE la legislación sobre competencia al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.

---

<sup>3</sup> Cuando se trata de operaciones de concentración de empresas es necesaria la notificación previa a la fusión, para evitar la posibilidad de que haya que anular la concentración si se juzga que ésta tiene efectos contrarios a la competencia.

<sup>4</sup> Véase el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>5</sup> Artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>6</sup> Véase el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC. Si bien existen disposiciones en esos términos de interés público en la legislación de casi todos los Miembros de la OMC, rara vez se han utilizado tales disposiciones.

<sup>7</sup> Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

## **I. LA RELACIÓN ENTRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO Y LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC**

10. El Acuerdo sobre los ADPIC es uno de los tres que constituyen los pilares de la OMC. Al establecer esa normativa, los Miembros de la OMC convinieron en la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas destinadas a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo.<sup>8</sup> En el Acuerdo sobre los ADPIC se establecen niveles de protección mínima, aplicables a todos los Miembros de la OMC, en la esfera de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión del ejercicio de dichos derechos. El Acuerdo abarca el derecho de autor y derechos conexos, las marcas de fábrica o de comercio, incluidas las marcas de servicios, las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes (con inclusión de la protección de nuevas obtenciones vegetales), y los esquemas de trazado de los circuitos integrados. Son características clave de esos derechos el estar circunscritos a un territorio y sujetos, por regla general, a una limitación temporal, y el admitir un número limitado de excepciones a los derechos conferidos.

11. Figuran también en el Acuerdo sobre los ADPIC disposiciones relativas a la protección de la información no divulgada y al control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales. Se establecen, por último, en el Acuerdo los principios del trato nacional y del trato de la nación más favorecida.

### Derecho de autor y derechos conexos

12. El derecho de autor se refiere a los derechos exclusivos de los creadores con respecto a la creación en todas sus formas (durante la vida del autor y 50 años más<sup>9</sup>). Para gozar de protección, la obra del creador tendrá que ser original. El derecho de autor afecta a todas las formas y métodos de comunicación pública, por escrito o por difusión radiofónica o televisiva, películas cinematográficas o sistemas informatizados. Protege al creador contra quienes copien su obra sin su consentimiento. La legislación sobre el derecho de autor, sin embargo, protege únicamente la forma de expresión de las ideas (libros, pinturas, dibujos, composiciones musicales, películas cinematográficas, etc.) y no las ideas en sí.

13. Los "derechos conexos" se refieren a la protección de quienes divulgan o comunican al público la obra original, es decir a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (por 50 años, en ambos casos) y los organismos de radiodifusión (por 20 años).

14. Se permiten algunos usos sin autorización del titular del derecho (véase el párrafo 7 *supra*).

15. Marcas de fábrica o de comercio, incluidas las marcas de servicios. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otra empresa de un mismo territorio. Los derechos que confiere la marca de fábrica o de comercio vienen determinados por el registro de ésta, es decir, que el titular de una marca de fábrica o de comercio, o de una marca de servicios, registrada es el único que tiene el derecho exclusivo (por un plazo de al menos siete años, prorrogable) de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a

---

<sup>8</sup> Véase el preámbulo al Acuerdo sobre los ADPIC.

<sup>9</sup> Los distintos países pueden prescribir plazos más largos. En la CE se aplica el de 70 años.

aquellos para los que se ha registrado la marca. Además, ese uso habrá de ser tal que dé lugar a probabilidad de confusión por parte del consumidor.<sup>10</sup>

#### Indicaciones geográficas

16. Indicaciones geográficas son las que identifican un producto como originario de un territorio, región o localidad, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Las indicaciones geográficas se protegen contra su uso cuando éste sea de naturaleza tal que induzca al público a error o constituya un acto de competencia desleal. Existe una excepción de esa protección, que es la de los casos en que la indicación geográfica se haya convertido en un nombre común.

#### Dibujos y modelos industriales

17. El dibujo o modelo industrial es el aspecto ornamental o estético de un artículo utilitario que pueda reproducirse por medios industriales. Para poder ser objeto de protección, el dibujo o modelo industrial creado independientemente debe ser nuevo u original. Podrá establecerse que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.

18. El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá (durante 10 años como mínimo) el derecho exclusivo de impedir que los terceros fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

#### Patentes

19. Pueden obtenerse patentes para todas las invenciones en todos los campos de la tecnología, sin discriminación, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Existe la importante posibilidad de excluir de la patentabilidad las plantas y los animales, excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Es posible la emisión de licencias obligatorias y el uso por el gobierno (sin autorización del inventor), pero ello está sujeto a condiciones encaminadas a proteger los intereses del titular de los derechos. Los derechos exclusivos se conceden por 20 años.

#### Esquemas de trazado de los circuitos integrados

20. No cabe confundirlos con los dibujos o modelos industriales, porque no son determinantes de la apariencia externa del producto, ni con las invenciones patentables, porque su creación no entraña una actividad inventiva. Requieren, por consiguiente, una protección de carácter especial, y el Acuerdo sobre los ADPIC prescribe la protección de los esquemas de trazado por 10 años.

#### Información no divulgada

21. La protección de la información no divulgada responde a la necesidad de proteger los secretos y modos de proceder comerciales, en atención a su valor en el comercio. Quien tenga legítimamente bajo su control información secreta con valor comercial debe tener la posibilidad de evitar que se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento o de manera contraria a los usos comerciales honrados. Además, se protegen contra todo uso comercial desleal los datos de prueba u otros no divulgados que hayan sido presentados como condición para la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas.

---

<sup>10</sup> Se exceptúan las marcas notoriamente conocidas.

El control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC

22. En el curso de la Ronda Uruguay tuvieron lugar amplios debates acerca de la relación entre la creación de un marco normativo de protección de los derechos de propiedad intelectual, por una parte, y, por la otra, la posible incorporación de disposiciones encaminadas a impedir el uso abusivo de esos derechos por parte de sus titulares. En el texto definitivo del Acuerdo sobre los ADPIC no figura un conjunto de obligaciones precisas que supediten el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual a los principios de la legislación en materia de competencia. Ello no obstante, se reconoce plenamente el derecho de los Miembros a promulgar legislación que garantice que el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual esté supeditado a los citados principios.<sup>11</sup> El Acuerdo sobre los ADPIC establece también, en la esfera de las licencias contractuales, la obligación de cooperación mutua entre los Miembros, mediante consultas, cuando esté siendo objeto de investigación alguna práctica que pueda ser ilegal. La referida cooperación tendrá lugar, por supuesto, dentro de los límites que determine la legislación nacional de los respectivos países y los acuerdos bilaterales de cooperación concertados, que pueden permitir, entre otras cosas, el intercambio de información entre los Miembros. Cabe añadir, de todos modos, que ha sido relativamente escasa la cooperación internacional en casos concretos. Es probable que ello se deba a que son muy pocos los países que han concertado acuerdos bilaterales de cooperación.

Observancia

23. La protección de los derechos de propiedad intelectual depende en gran parte de la posibilidad de hacer efectivos esos derechos. La parte del Acuerdo sobre los ADPIC que se consagra a la observancia es, por consiguiente, la clave de la eficacia de un sistema de protección de la propiedad intelectual. Se establecen en ella procedimientos y remedios, civiles y administrativos, así como también medidas en frontera, dirigidas estas últimas, por lo menos, contra la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías pirata que lesionen el derecho de autor. El Acuerdo estipula también que podrá entablarse procedimiento penal en los casos de falsificación o piratería a escala comercial.

24. Así pues, en el Acuerdo sobre los ADPIC, al igual que en muchos otros Acuerdos de la OMC en sus respectivas esferas, se reconoce plenamente que la legislación en materia de competencia puede constituir un valioso instrumento de apoyo al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de manera adecuada y propicia a la competencia.

25. La protección de los derechos de propiedad intelectual y la aplicación de los principios de la legislación sobre competencia vienen aseguradas, pues, mediante procesos análogos y, muchas veces, complementarios. En ambos se establecen procedimientos civiles a los que pueden acudir los particulares que deseen poner remedio a prácticas prohibidas. Ambos requieren también, sin embargo, la necesaria actuación administrativa de apoyo que garantice que la legislación nacional se cumple de modo objetivo, no discriminatorio y transparente, y que haga posible el descubrimiento de las prácticas ilícitas.

---

<sup>11</sup> Véanse los artículos 8 y 40 del Acuerdo sobre los ADPIC.

## II. LA EXPERIENCIA DE LA CE EN CUANTO A APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

26. En el derecho comunitario<sup>12</sup> se distingue entre la existencia y el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual (DPI). La existencia de un DPI no resulta afectada por el Tratado. En el artículo 222 se dispone que el Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros. Ello no obstante, el ejercicio de esos derechos está sujeto a las normas sobre la competencia (artículos 85 y 86 del Tratado), y a las normas sobre libre circulación de bienes (artículos 30 y 36) y libre prestación de servicios (artículo 59). El presente documento se ciñe al examen de la aplicación de las normas sobre la competencia.

### I. Normas relativas a los acuerdos horizontales y verticales

27. Las prácticas anticompetitivas resultantes de la cesión u otorgamiento de una licencia están sujetas a la normativa en materia de competencia que se aplica a los acuerdos horizontales o verticales. Los acuerdos sobre licencias entre competidores despiertan especial preocupación si dan lugar a distribución del mercado, limitación de la producción o fijación de los precios. También los acuerdos verticales pueden, en determinadas circunstancias, suscitar cuestiones en el ámbito de la legislación sobre competencia.

#### a) Cesión de derechos de propiedad intelectual

28. La cesión de un derecho de propiedad intelectual no constituye, por sí misma, una infracción de la legalidad en materia de competencia. Tal infracción aparecería únicamente si la cesión fuese objeto, medio o consecuencia de un acuerdo anticompetitivo<sup>13</sup>, es decir, si la cesión se encamina a consolidar un acuerdo de reparto del mercado.<sup>14</sup>

#### b) Otorgamiento de licencia

29. El otorgamiento de una licencia no constituye infracción de la legalidad en materia de competencia. Puede, incluso, estimular la competencia, en cuanto que permite el aumento del número de competidores.

30. La normativa comunitaria en materia de competencia, habida cuenta de sus objetivos de integración del mercado, mostró especial interés por evitar que el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual diese lugar a una segmentación del mercado comunitario al impedir la competencia de importadores paralelos, una vez que el producto fuese comercializado legalmente, con el consentimiento del titular del derecho, en el seno de la Comunidad. El artículo 85 se aplica únicamente a las licencias exclusivas "cerradas" (con las que las partes se proponen, por lo que respecta a los productos y al territorio en cuestión, eliminar toda competencia por parte de terceros, tales como los importadores paralelos o los titulares de licencias para otros territorios<sup>15</sup>), y no a las licencias exclusivas "abiertas" (la exclusividad se refiere solamente a la relación contractual entre el titular del derecho y el de la licencia, y el titular del derecho se obliga simplemente a no conceder más licencias con respecto al mismo territorio y a no competir él mismo con el titular de la licencia en

---

<sup>12</sup> Por lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio, véanse las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos *Grundig v Consten* [1986] ECR 299, y *Sirena* [1971] ECR 69. Por lo que se refiere a patentes, véase la sentencia en el asunto *Parke Davis* [1968] ECR 55.

<sup>13</sup> Sentencia en el asunto *Sirena* [1971] ECR 69, párrafo 9.

<sup>14</sup> Sentencia en el asunto *Ideal Standard* [1994] ECR I2789, párrafo 59.

<sup>15</sup> Sentencia en el asunto *Nungesser* (semilla de maíz) [1982] ECR 2015, párrafo 53.

dicho territorio<sup>16</sup>). Lo que se trata de lograr con ese planteamiento es alentar a los titulares de licencias a que asuman el riesgo que entraña la explotación de una licencia que lleva consigo una nueva tecnología, protegiéndolos para ello contra la competencia por parte de otros titulares de licencias, o del titular del derecho, en el territorio para el que se otorga la licencia. Se adoptó en un principio para las obtenciones vegetales<sup>17</sup>, y luego se extendió a otros derechos de propiedad industrial.

31. En virtud de la prohibición general de la fijación de precios mínimos, el titular de un DPI no puede imponer a los concesionarios de licencias unos determinados precios o márgenes.

32. Las restricciones impuestas a los titulares europeos de licencias de patentes, conocimientos técnicos o marcas de fábrica o de comercio en cuanto a sus exportaciones al exterior de la CE no repercutirán, por lo general, de forma apreciable dentro de la Comunidad ni en el comercio entre los Estados miembros y, por consiguiente, quedan fuera del alcance del derecho comunitario en materia de competencia.

33. Las autoridades comunitarias estiman que determinados tipos de acuerdo de transferencia de tecnología (término que abarca tanto las licencias de patentes como las de conocimientos técnicos) contribuyen a la mejor producción o distribución de los bienes o al fomento del progreso técnico o económico. Por consiguiente, y con arreglo a las normas sobre competencia<sup>18</sup>, esos acuerdos no tienen por qué ser notificados y no están prohibidos por el párrafo 1) del artículo 85, siempre que cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento de 31 de enero de 1996 sobre acuerdos de transferencia de tecnología.

#### **Reglamento de 31 de enero de 1996 sobre acuerdos de transferencia de tecnología**

El Reglamento sobre acuerdos de transferencia de tecnología excluye de la prohibición impuesta en el párrafo 1) del artículo 85 algunas cláusulas restrictivas, como, por ejemplo, la obligación del titular de la licencia cedida de:

- no explotar la tecnología de que se trate en territorios reservados al cedente;
- no comercializar el producto en territorios reservados a otros concesionarios durante cinco años contados desde la primera comercialización del producto;
- limitar la producción y venta del producto a lo que el concesionario necesite como insumo para su propio producto.

El Reglamento no es aplicable a los acuerdos que contengan una "cláusula negra", como, por ejemplo:

- si se impuso un precio de reventa;
- si se exige, sin justificación objetiva, que una o ambas partes creen dificultades para la obtención, por parte de los usuarios o revendedores, de los productos procedentes de otros revendedores dentro del mercado común.

El Reglamento se aplica a todos los acuerdos que surtan efecto dentro del mercado común, con inclusión de los acuerdos relativos a países no miembros o a territorios que se extiendan más allá de las fronteras de la Comunidad, si éstos surten efecto dentro del mercado común.

<sup>16</sup> Sentencia en el asunto *Nungesser* (semilla de maíz) [1982] ECR 2015, párrafo 53.

<sup>17</sup> Sentencia en el asunto *Nungesser* (semilla de maíz) [1982] ECR 2015, párrafo 57.

<sup>18</sup> Tales acuerdos deben permitir que los consumidores reciban una parte equitativa de los beneficios resultantes, y no deben imponer a las empresas restricciones que no sean indispensables, ni proporcionar a las empresas la posibilidad de eliminar la competencia con respecto a una parte sustancial de la producción de que se trate.



## II. Normas relativas al abuso de la posición dominante

### a) La posición dominante

34. El carácter exclusivo conferido al titular de un derecho de propiedad intelectual no es suficiente para determinar, sin más, la existencia de una posición dominante. El Tribunal de Justicia juzga que el titular ha de tener, además, la facultad de impedir que se mantenga una competencia eficaz en una parte considerable del pertinente mercado, teniendo presente, en especial, la existencia y la posición de los productores o distribuidores que puedan estar comercializando productos similares o productos que puedan sustituir a éstos.<sup>19</sup> Sin embargo, el derecho exclusivo es uno de los factores que contribuyen a una posición dominante.

### b) El abuso

35. El Tribunal de Justicia juzga que el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual no contraviene el artículo 86 por el simple hecho de que su titular sea una empresa que ocupa posición dominante.<sup>20</sup> Por otra parte, será de aplicación el artículo 86 cuando el derecho se utilice para abusar de una posición dominante.<sup>21</sup> Por ejemplo:

#### Precios excepcionalmente elevados

36. El precio de las mercancías no siempre es indicativo de abuso<sup>22</sup>, puesto que el titular de un derecho puede exigir legítimamente que sean remunerados los gastos efectuados para adquirirlo.<sup>23</sup> Por regla general, los precios excepcionalmente elevados nacen de un impedimento, ya sea estratégico o normativo, a la entrada en el mercado. Habida cuenta de ello, la mejor manera de abordar el problema es, por regla general, intervenir para evitar los obstáculos injustificados que puedan oponerse a esa entrada. Sólo en circunstancias excepcionales podrían considerarse constitutivos de abuso, por sí mismos, los precios excepcionalmente elevados.

#### Discriminación

37. El Tribunal de Justicia decidió que una sociedad nacional de gestión del derecho de autor que ocupaba posición dominante en una parte sustancial del mercado común había impuesto condiciones de comercio desleales al obligar a las discotecas al pago de regalías que eran, *sin justificación objetiva*, notablemente más elevadas que las impuestas en otros Estados miembros, habiéndose comparado las tarifas sobre una base coherente.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Por lo que respecta a marcas de fábrica o de comercio, véase la sentencia en el asunto *Sirena* [1971] ECR 69.

<sup>20</sup> Por lo que respecta a marcas de fábrica o de comercio: véanse las sentencias en el asunto *Hoffmann La Roche* [1978] ECR 1139, párrafo 16, y en el asunto *EMI* [1987] ECR 811, párrafo 21.

Por lo que respecta al derecho de autor, véase la sentencia en el asunto *Basset v Sacem* [1987] ECR 1747.

<sup>21</sup> Sentencia en el asunto *Hoffmann La Roche* [1978] ECR 1139.

<sup>22</sup> Por lo que respecta a las patentes, véase la sentencia en el asunto *Parke Davis* [1968] ECR 55. Por lo que respecta a marcas de fábrica o de comercio, véase la sentencia en el asunto *Sirena* [1971] ECR 69. Por lo que respecta al derecho de autor, véase la sentencia en el asunto *Deutsche Grammophon* [1971] ECR 487, párrafo 19.

<sup>23</sup> Por lo que respecta a las patentes, véase la sentencia en el asunto *Renault* [1988] ECR 6039.

<sup>24</sup> Sentencia en el asunto *Sacem* [1989] ECR 2521.

38. La Comisión estimó también que había habido abuso de una posición dominante cuando se impuso una regalía a las importaciones en Alemania de un determinado producto de otros Estados miembros, a pesar de haberse pagado ya una regalía por ese mismo producto. Dicho de otro modo, que el producto en cuestión era objeto de dos pagos de regalías cuando los revendedores lo importaban o reimportaban en Alemania, mientras que sólo pagaba una cuando era distribuido directamente en Alemania por sus fabricantes.<sup>25</sup>

#### Negativa a conceder una licencia

39. La negativa a conceder a terceros, incluso a cambio de unas regalías razonables, una licencia de suministro de productos que incorporen un dibujo o modelo registrado no constituye por sí sola un abuso de la posición dominante. Hacen falta para que lo sea otros elementos, tales como el hecho de que el titular de la patente no la utilice ni permita que la utilicen otros (con licencia), privando así al público, en contra del interés general, de un importante progreso técnico, o fije unos precios de venta que no sean razonables, o unas condiciones de venta discriminatorias.<sup>26</sup>

#### **El asunto Volvo/Veng:**

La empresa Volvo, titular, en el Reino Unido, de un modelo registrado de guardabarros para los automóviles Volvo de la serie 200, demandó ante un tribunal nacional a la empresa Veng por infracción de sus derechos de exclusiva, alegando que Veng importaba esas mismas piezas de carrocería fabricadas sin la autorización de Volvo y las comercializaba en el Reino Unido.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, al que se pidió una decisión preliminar, decidió que la negativa del titular de un dibujo o modelo industrial registrado con respecto a piezas de carrocería a conceder a terceros, incluso a cambio de unas regalías razonables, una licencia para la provisión de las piezas que respondan a dicho modelo no podía considerarse constitutiva, por sí misma, de abuso de una posición dominante, en el sentido del artículo 86.

El Tribunal declaró también, sin embargo, que el ejercicio de un derecho exclusivo por el titular de un dibujo o modelo industrial registrado puede estar prohibido por el artículo 86, si entraña, por parte de la empresa que tiene una posición dominante, cierta conducta abusiva, tal como la negativa arbitraria a suministrar piezas de repuesto a empresas de reparación independientes, la fijación de precios para las piezas de repuesto a niveles que no sean razonables, o la decisión de dejar de producir piezas de repuesto para un determinado modelo, aun cuando estén en circulación todavía muchos automóviles del modelo en cuestión, siempre que tal conducta pueda afectar al comercio entre Estados miembros.

40. En el asunto *Magill*, el Tribunal de Justicia reconoció que el ejercicio de un derecho exclusivo por su titular podía constituir, "en circunstancias excepcionales", abuso de una posición dominante.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Decisión de la Comisión de 2 de junio de 1971, OJ N° L 134, 20 de junio de 1971.

<sup>26</sup> Sentencias en el asunto *Renault* [1988] ECR 6039 y en el asunto *Volvo v Veng* [1988] ECR 6211.

<sup>27</sup> Sentencia en el asunto *Magill* [1995] ECR 808.

**El asunto Magill:**

Con arreglo al derecho irlandés, las entidades emisoras de televisión son titulares del derecho de autor de las listas de los programas que emiten. Entendieron, por consiguiente, que tenían derecho a prohibir que una editorial independiente reprodujese sus programas semanales en una guía de todas las emisiones de televisión que se reciben en Irlanda.<sup>28</sup>

El Tribunal juzgó, por el contrario, que la negativa constituía abuso de una posición dominante:

- cada empresa emisora ocupaba posición dominante tanto en el mercado representado por sus programas semanales como en el mercado de las revistas en que éstos se publicaban;
- la negativa constituía abuso, ya que impedía la comercialización de un nuevo producto, con respecto al cual existía demanda por parte de los consumidores, eliminando así toda la competencia con el único fin de conservar el monopolio de las empresas emisoras.

### III. Normas relativas a la fusión de empresas

41. Con arreglo al Reglamento N° 4064/89<sup>29</sup>, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, se entiende que existe una operación de concentración, entre otros supuestos, cuando una o más personas adquieren, directa o indirectamente, el control sobre una u más empresas. Dicho control puede resultar, entre otras cosas, de derechos de propiedad intelectual, si éstos confieren la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre las actividades de una empresa.

42. Los derechos de propiedad intelectual pueden entrar en juego también en el análisis de las fusiones de empresas, como ocurrió, por ejemplo, en el asunto *Glaxo/Wellcome*, en el cual se autorizó una fusión tras haberse comprometido las partes a conceder una licencia exclusiva a un tercero para llevar a cabo el desarrollo y la distribución del producto.

## **SEGUNDA PARTE: RELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA DE INVERSIONES Y LA POLÍTICA DE COMPETENCIA**

### Introducción

1. La inversión extranjera<sup>30</sup> ha pasado a ser una importante fuente para los gobiernos que se proponen crear puestos de trabajo, atraer tecnología y realzar la base competitiva de la economía nacional. La inversión extranjera ha crecido con gran rapidez en años recientes, impulsada por las empresas que adoptan métodos de producción internacional o que aspiran a atender a diferentes mercados.

---

<sup>28</sup> La negativa podía haberse basado también, *a priori*, en el artículo 36 del Tratado: las restricciones nacionales a la importación, prohibidas en principio por el artículo 30, pueden justificarse, con arreglo al artículo 36, por razones de protección de la propiedad industrial.

<sup>29</sup> OJ L 395, 30 de diciembre de 1989, rectificado en OJ L 257, 21 de septiembre de 1990.

<sup>30</sup> Se entiende por inversión extranjera, en la presente comunicación, la inversión extranjera directa, caracterizada por un horizonte de inversión a largo plazo que lleva consigo un cierto grado de control de la gestión. Se distingue, pues, de la inversión en cartera, que también puede ser fuente importante de entrada de capital, pero tiene carácter más volátil, por regla general.

2. En esta parte de la comunicación de la CE se examinará la relación entre la adopción de políticas liberales en materia de comercio e inversiones y la instauración de estructuras de competencia nacionales. Se destacará el carácter complementario que fundamentalmente tienen esas dos políticas, como lo demuestra el que tantos países hayan modificado recientemente sus regímenes de inversión y hayan promulgado o piensen promulgar legislación sobre competencia. Se prestará especial atención a las posibilidades de los países en desarrollo en cuanto a elección de políticas.

3. Cabe señalar, como antecedente, que el Informe de 1997 de la UNCTAD<sup>31</sup> sobre las inversiones en el mundo se consagra concretamente a la relación entre la liberalización de la inversión extranjera y la política de competencia, relación de la que se ocupa también el Informe Anual de la Secretaría de la OMC correspondiente a 1997.<sup>32</sup>

#### Antecedentes

4. Las corrientes internacionales de inversión extranjera han crecido estos últimos años a un ritmo mucho más rápido que el comercio transfronterizo de mercancías. Se coincide cada vez más en que los efectos de la inversión extranjera en la economía de un país son, por lo general, positivos, y ello, junto con la adopción de políticas comerciales más liberales y la desregulación a escala global, ha desencadenado un rapidísimo incremento de las corrientes de IED. Se han beneficiado de esa tendencia tanto los países desarrollados como los países en desarrollo, y estos últimos reciben en la actualidad alrededor del 40 por ciento de las inversiones en el exterior, mientras que su participación en las corrientes de salida es de alrededor del 15 por ciento. En términos generales, se estima que la liberalización de las oportunidades de inversión, sea ésta extranjera o nacional, es de primordial importancia para el aumento de la competencia y el crecimiento de las distintas economías.

5. Se admite hoy en día, en general, que la política en cuanto a regulación, la política comercial, la política en materia de IED y la política de competencia ocupan posición central entre las que pueden adoptar los gobiernos para lograr un mayor crecimiento y bienestar del país mediante una mejora de la asignación de recursos y de la competitividad en los mercados. Se ve cada vez más confirmada la importancia que reviste la compatibilidad y coherencia de esas dos políticas, sobre todo cuando se observa que son muchos los países en los que tienen lugar simultáneamente la liberalización del comercio, la desregulación del mercado interno y la implantación o refuerzo de políticas de competencia.

#### Las estructuras de competencia interior sirven de complemento a las políticas liberales de comercio e inversión

6. Es cuestión clave para muchos de los países que aplican políticas de comercio e inversión más liberales, o que están procediendo a una desregulación, la de hasta qué punto tienen que ir apoyadas esas políticas por la adopción de estructuras de política de competencia. Esa cuestión se plantea con especial agudeza cuando se trata de países en desarrollo, ya que la política de competencia puede exigir recursos adicionales para crear nuevas capacidades y estructuras administrativas.

7. Los principales argumentos que se aducen a favor de la creación de estructuras nacionales en materia de competencia pueden resumirse como se hace en los párrafos siguientes.

8. En primer lugar, existen en la economía de cada país sectores que pueden quedar, hasta cierto punto, al margen de los efectos de la liberalización del comercio y de las inversiones, como son, por ejemplo, los de los servicios que no son objeto de comercio internacional y que pueden depender de requisitos nacionales. En esos sectores, la política de competencia puede ser un buen instrumento

---

<sup>31</sup> Véanse, sobre todo, las páginas 183 a 233 del original.

<sup>32</sup> Véanse las páginas 84 a 87.

para garantizar la competencia efectiva de manera tal que lleguen a los consumidores las ventajas de las reformas de la política.

9. En segundo lugar, las políticas de desregulación y privatización que se están siguiendo en muchos países son, con frecuencia, de largo alcance, ya que abarcan desde las telecomunicaciones, la energía y los servicios postales hasta las líneas aéreas y otras formas de transporte. El éxito de esas políticas, y también su aceptación por el público en general, dependerá de que los gobiernos sean capaces de inyectar y mantener una sana competencia tras la liberalización del mercado, acudiendo también para ello a la aplicación de la legislación sobre competencia y a regímenes normativos propicios a la competencia.

10. Es interesante observar que los Estados miembros de la Comunidad Europea reforzaron también sus respectivas políticas de competencia. Un ejemplo, entre los muchos que cabría citar, es el de los Países Bajos, que, a pesar de tener un mercado interno relativamente reducido en comparación con el de la UE en general, y una gran apertura al comercio y a la inversión extranjera, optaron en años recientes por modificar su legislación básica en materia de competencia y reforzar la independencia, la capacidad administrativa y los instrumentos al alcance del órgano encargado de aplicar dicha legislación.<sup>33</sup>

11. En tercer lugar, un encuadramiento jurídico y administrativo que garantice una sana competencia puede contribuir al establecimiento de las condiciones adecuadas para que tenga éxito la puesta en práctica de políticas liberales de comercio e inversión. Es elemento clave del debate en torno a la política en general el hecho de que las empresas extranjeras, al calibrar las posibilidades de invertir en diferentes mercados, otorgarán posición ventajosa al país que cuente con un sistema jurídico más desarrollado en cuanto a facilidad de acceso y protección de la inversión, reducción de cargas administrativas y atención a poner remedio a las distorsiones del proceso de la competencia. Un marco normativo estable en materia de competencia atraerá inversiones extranjeras, al fortalecer la reglamentación básica de la economía y la confianza en la estabilidad de las políticas.

12. La modificación de los regímenes de inversión de muchos países fue impulsada por la aceptación de que un examen selectivo previo de las inversiones extranjeras mediante procedimientos de solicitud centralizados, que a menudo llevan consigo gravosos requisitos previos al establecimiento, o fijación de sectores prioritarios, puede dar lugar, en realidad, a considerables costos, obstaculizar la transferencia de tecnología y desalentar, en general, la inversión extranjera. Puede incluso darse el caso, en la actualidad, de que los gobiernos de muchos países traten de fomentar las inversiones mediante políticas tales como la concesión de ventajas fiscales o de otra índole hechas a la medida, o la aplicación de restricciones del comercio, como, por ejemplo, la elevación de aranceles, para proteger al nuevo inversor frente a la competencia procedente de las importaciones.

13. Si bien lo que se deja expuesto es testimonio de las modificaciones de política adoptadas con mayor o menor generalidad, pueden ser muchos los países, con inclusión de países en desarrollo, que siguen sintiendo inquietud ante la posibilidad de que la liberalización de las inversiones pueda dar lugar a competencia desleal o a la creación de monopolios por las empresas extranjeras que tratan de penetrar en el mercado con utilización intensiva de su capital. En todos esos casos pueden los organismos antimonopolio desarrollar una importante actividad de protección de los consumidores y de los competidores frente a las prácticas contrarias a la competencia.

14. Ha de tenerse presente que no se ha demostrado que exista una clara correlación entre la liberalización de la inversión extranjera en los países en desarrollo y el aumento de la concentración en sus mercados. Además, y dado que la legislación sobre competencia tiene por objeto beneficiar a

---

<sup>33</sup> La legislación de la CE sobre competencia se aplica, por supuesto, a todas las prácticas en el ámbito comunitario siempre que resulte afectado el comercio entre Estados miembros.

los consumidores y mantener el proceso de la competencia en una economía nacional con independencia del origen de los productores o de los proveedores de servicios, es posible, naturalmente, que su aplicación actúe en la dirección contraria. Puede, por ejemplo, afectar a las firmas existentes, si éstas tratan de formar un cártel o de acudir a otros métodos contrarios a la competencia para impedir la entrada de una empresa extranjera. Es indispensable, por consiguiente, que la legislación sobre competencia sea neutral en su aplicación, de modo tal que pueda ocuparse de las prácticas contrarias a la competencia, tanto si son nacionales como si son extranjeras las empresas que las utilizan. Deben también ser neutrales, en general, y no establecer diferencia alguna entre productores nacionales y extranjeros, los aspectos procesales de la legislación sobre competencia, como, por ejemplo, las disposiciones relativas a acceso a los tribunales nacionales, a la aplicación de remedios, al procedimiento de apelación, y a las prescripciones en materia de transparencia y motivación.

15. En cuarto lugar, la política de competencia puede ser un complemento indispensable de la liberalización de las inversiones también en otros aspectos. La inversión, tanto extranjera como nacional, puede adoptar diferentes formas, como, por ejemplo, las de inversión en nuevas empresas o en la adquisición o fusión de empresas. Las repercusiones en la competencia pueden ser diferentes según los casos, ya que la inversión en nuevas empresas dará lugar, por lo general, a un aumento del número de competidores, mientras que, cuando se trata de adquisiciones o fusiones de empresas, tal vez sea necesario sopesar las ventajas que puedan ofrecer, teniendo en cuenta la reducción del número de proveedores o el refuerzo de una posición dominante a que pueden dar lugar. Se aprecia una vez más, a este respecto, lo ventajosa que resulta, como apoyo de una sana competencia en la economía, la supervisión caso por caso por parte de una autoridad en materia de competencia que funcione debidamente, así como el control previo en virtud de la legislación que exige la notificación por anticipado de las fusiones de empresas.

16. En términos generales, cuando se llevan a cabo conjuntamente una política liberal de inversión y comercio y una política de competencia eficaz, es probable que sean mayores los efectos positivos de las inversiones, con inclusión de la inversión extranjera, y que se alcancen niveles de competencia más elevados, tanto en los mercados nacionales como en la capacidad de las empresas para competir en los mercados internacionales.

#### Costos y beneficios de la legislación sobre competencia

17. La aplicación de la política de competencia exige una compleja evaluación de las prácticas empresariales en mercados dinámicos, así como el empleo de facultades de indagación, y, por consiguiente, hace necesario disponer de un personal capacitado y de una adecuada capacidad administrativa y judicial. Sin embargo, y pese a los costos que ello lleva consigo, son más de 70 los países que han promulgado legislación en materia de competencia, gran parte de la cual se ha fortalecido en el pasado decenio en términos de prescribir normas más estrictas y de mayor alcance y sanciones más elevadas. Hay muchos más países que están procediendo también a elaborar legislación de esa naturaleza o pensando en adoptarla. Cabe afirmar, por consiguiente, que goza de aceptación cada vez mayor la idea de que un organismo de competencia que funcione debidamente es el instrumento adecuado para reemplazar onerosos procedimientos administrativos previos de enjuiciamiento de la inversión extranjera y de otros requisitos de establecimiento<sup>34</sup>, y para obtener al mismo tiempo ventajas conexas, tales como la de facilitar la ulterior desregulación de la economía.

---

<sup>34</sup> Muchos países comenzaron por simplificar su legislación sobre inversión extranjera y eliminar gradualmente las prescripciones previas al establecimiento, como, por ejemplo, las relativas a la gama de productos o a la capacidad de producción de una posible inversión, a un mínimo de contenido nacional, al resultado de las exportaciones, a equilibrio cambiario o a transferencia de tecnología, así como también las encaminadas a elevar al máximo los topes limitativos de la participación extranjera en el capital social en determinados sectores. Ha de tenerse en cuenta también que los procedimientos eficaces de selección previa requieren considerables recursos administrativos, que podrían liberarse con este proceso de simplificación.

Además, la política de competencia, por el enfoque de casos concretos y de carácter casi clínico que adopta para proteger el proceso competitivo, puede resultar, con mucha probabilidad, un instrumento eficaz y rentable, en comparación con su costo. Puede también, por regla general, hacer posible una disminución de la burocracia en el conjunto de la administración del Estado. Por último, buena parte de las disposiciones legales sobre competencia se ponen en práctica a instancia de particulares en los tribunales civiles y no exigen participación de los organismos oficiales.

#### La dimensión internacional de las políticas sobre inversión y competencia

18. Es interesante señalar que, al transformarse el GATT en la OMC, el sistema de intercambios comerciales abarca ahora un número cada vez mayor de disposiciones sobre inversiones y sobre protección de la competencia. Por ejemplo, el modo de suministro más importante en el comercio de servicios es, por regla general, la inversión extranjera mediante presencia comercial. Los compromisos de acceso contraídos en una negociación sobre servicios originan, por lo tanto, un derecho a invertir mediante establecimiento en el país de que se trate. Además, en el AGCS se prescribe<sup>35</sup> que cada Miembro se asegurará de que, en todos los sectores en que se contrajeron compromisos, incluida la inversión mediante presencia comercial, ningún proveedor abuse de su posición de monopolio ni actúe de manera incompatible con dichos compromisos. Se admitió, además, en el curso de las recientes negociaciones sobre telecomunicaciones, que es necesario que los compromisos en cuanto a presencia comercial se refuercen mediante disposiciones de salvaguardia de la competencia que protejan la competencia entre proveedores y garanticen el acceso a redes fijas en términos de competencia y no discriminatorios. Más de 55 países accedieron a garantizar esos principios reglamentarios propicios a la competencia mediante su aprobación del llamado documento de referencia.

19. En respuesta al crecimiento de las IED, son cada vez más numerosos los países que se han visto impulsados a concertar acuerdos bilaterales de protección de las inversiones. Existen en la actualidad unos 1.600 acuerdos bilaterales de protección de las inversiones, mientras que al comienzo del decenio de 1990 sólo había unos 600.

20. De modo análogo, ha habido en años recientes un aumento del número de acuerdos bilaterales y regionales que abarcan disposiciones sobre cooperación en la esfera de la política de competencia. Si bien es cierto que esos acuerdos pueden ser de diferente alcance y profundidad, según cual sea el grado de desarrollo de las estructuras de competencia de los respectivos países, es cada vez mayor el número de países que se han dado cuenta de los beneficios de una cooperación internacional más estrecha.

#### Resumen y conclusiones

1. La presente comunicación, que debe ser considerada juntamente con anteriores comunicaciones de la CE y de sus Estados miembros, señala a la atención en especial las cuestiones que seguidamente se indican.

2. Existe una relación fundamentalmente complementaria entre la liberalización de los regímenes del comercio y de las inversiones, la protección de los derechos de propiedad intelectual y una política activa de aplicación de la legislación de competencia. Muchos Miembros de la OMC, y sobre todo los que son países en desarrollo, han emprendido reformas económicas en todas esas esferas, como medio de fomentar el crecimiento y la eficacia, y de aumentar la capacidad de las empresas nacionales para competir en los mercados internacionales. Esas reformas han llevado consigo también el abandono de pesadas prácticas administrativas y métodos ineficaces de selección previa de las inversiones extranjeras. Un marco normativo para las actividades empresariales que sea

---

<sup>35</sup> Artículo VIII del AGCS.

estable, no discriminatorio y transparente, del cual forma parte indispensable la legislación sobre competencia, se va revelando, cada vez más, como esencial para atraer inversiones, asegurar los beneficios de la liberalización del comercio y hacer frente, además, a las prácticas anticompetitivas.

3. La protección de los derechos de propiedad intelectual contribuye a aumentar el dinamismo y la eficacia y es, por consiguiente, propicia a la competencia. Al mismo tiempo, el ejercicio de esos derechos debe estar sujeto a la legislación básica en materia de competencia, por lo que respecta al control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales y a posibles abusos de una posición dominante. El Acuerdo sobre los ADPIC subraya el interés que tiene para los Miembros de la OMC la elaboración de legislación sobre competencia como instrumento óptimo para hacer frente a los abusos que puedan derivarse del ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. La legislación de competencia proporciona normas objetivas para oponerse a esos abusos sin menoscabar, en modo alguno, el nivel de protección que corresponde a los titulares de los derechos.

4. En el Acuerdo sobre los ADPIC se reconoce la importancia de las consultas y de la cooperación con respecto a las cuestiones que se plantean en la aplicación de la legislación de competencia cuando se trata de prácticas contrarias a la competencia en las licencias contractuales. Es evidente, sin embargo, que la cooperación resulta más fácil si los Miembros de la OMC han elaborado una estructura de legislación en materia de competencia. Una cuestión importante que habría que considerar al deliberar acerca de un marco normativo multilateral de la competencia es la del papel que podría desempeñar la OMC en cuanto a prestar apoyo a la cooperación entre las autoridades que se ocupan de la competencia. Cabe esperar que los países en desarrollo obtengan considerables beneficios de la cooperación multilateral, en términos de compartir experiencias, crear capacidad y cooperar en actividades de aplicación. Ello debería ser, pues, un importante foco de las futuras tareas.

5. Otro rasgo importante del Acuerdo sobre los ADPIC es el establecimiento de normas detalladas por lo que respecta a la observancia de las disposiciones, con inclusión de los procedimientos y remedios a que se puede acudir con arreglo a la legislación nacional. Se trata, por supuesto, de disposiciones aplicables en concreto a la ejecución de los derechos de propiedad intelectual, la cual depende, en la mayoría de los casos, de que las partes ejerciten la correspondiente acción. La aplicación de la legislación sobre competencia se lleva a cabo, por el contrario, tanto mediante acciones de las autoridades encargadas de esa materia como a instancia de parte ante los tribunales. Una cuestión en la que habría que pensar en relación con una estructura multilateral de normas sobre competencia es la del interés que reviste la elaboración de disposiciones sobre ejecución que se ajusten a las características específicas de la legislación sobre competencia. En esas disposiciones podrían determinarse los derechos que se otorgarían, en virtud de la legislación nacional, a los particulares que fuesen parte en procedimientos de ejecución. Sería útil prestar atención a esos derechos, tanto en lo relativo a los procedimientos administrativos de las autoridades en materia de competencia como a los procedimientos de ejecución entablados ante los tribunales. Habría que ocuparse también, en este contexto, de las cuestiones relativas a la transparencia y al carácter no discriminatorio.

6. Se reconocen, por lo general, los beneficios que se derivan de la liberalización de los regímenes de inversión extranjera en cuanto al crecimiento y al desarrollo. Muchos Miembros de la OMC, y sobre todo los que son países en desarrollo, han visto las ventajas que tiene el llevar a cabo en forma paralela una liberalización de las normas sobre inversión extranjera y un refuerzo de la normativa sobre competencia. Una estructura normativa en cuanto a competencia que sea transparente y no discriminatoria proporciona los medios de hacer frente a las prácticas contrarias a la competencia, ya sean nacionales o extranjeras las empresas que las utilizan. Quien mejor puede ejercer esa función es una autoridad encargada de la competencia que esté dotada de suficientes facultades de indagación y ejecución por lo que respecta a acuerdos contrarios a la competencia y a abuso de una posición dominante, así como también mediante el control previo que prescribe la legislación sobre notificación anticipada de las fusiones de empresas. Como ya se hizo notar, los



países en desarrollo necesitarían asistencia y cooperación internacional para establecer esas autoridades y potenciar su capacidad de ejecución de las normas.

7. Las tendencias indicadas subrayan que la política de inversión y la política de competencia, aunque sean distintas y separadas, tienen una dimensión internacional cada vez mayor y ambas se beneficiarían de una cooperación multilateral más intensa. Las políticas de inversión abiertas y la aplicación de una política de competencia activa se complementan mutuamente y contribuyen al aumento de la eficacia, del crecimiento y del desarrollo.

8. En la Declaración de Singapur, la OMC decidió establecer dos grupos de trabajo encargados respectivamente de examinar la relación entre comercio e inversiones y de examinar la interacción entre comercio y política de competencia. La CE y sus Estados miembros creen que procede pensar en la elaboración de un marco multilateral en cada una de esas esferas. A nuestro modo de ver, una normativa multilateral contribuiría a una mayor coherencia, previsibilidad y convergencia, así como también al fortalecimiento del sistema multilateral de comercio.

---